

No. 35945

**Spain
and
Morocco**

Convention on judicial assistance in civil, commercial and administrative matters between the Kingdom of Spain and the Kingdom of Morocco. Madrid, 30 May 1997

Entry into force: *provisionally on 30 May 1997 by signature and definitively on 1 July 1999 by notification, in accordance with article 45*

Authentic texts: *Spanish, Arabic and French*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Spain, 5 August 1999*

**Espagne
et
Maroc**

Convention de coopération judiciaire, en matière civile, commerciale et administrative entre le Royaume d'Espagne et le Royaume du Maroc. Madrid, 30 mai 1997

Entrée en vigueur : *provisoirement le 30 mai 1997 par signature et définitivement le 1er juillet 1999 par notification, conformément à l'article 45*

Textes authentiques : *espagnol, arabe et français*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Espagne, 5 août 1999*

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

**CONVENIO
DE COOPERACION JUDICIAL,
EN MATERIA CIVIL, MERCANTIL
Y ADMINISTRATIVA
ENTRE
EL REINO DE ESPAÑA
Y EL REINO DE MARRUECOS**

El Reino de España y

El Reino de Marruecos,

Animados por el deseo de promover y reforzar las tradicionales relaciones de amistad y de cooperación judicial entre ambos países;

Considerando que el establecimiento de un sistema de reconocimiento y de ejecución de resoluciones judiciales permitirá estimular la confianza recíproca en sus instituciones judiciales;

Conviene en concertar un Convenio de Cooperación Judicial en Materia Civil, Mercantil y Administrativa y adoptan a estos fines las disposiciones siguientes:

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Del acceso a los tribunales

Artículo 1:

Los nacionales de cada uno de ambos Estados disfrutarán en el territorio del otro Estado, de libre y fácil acceso a los tribunales, tanto judiciales como administrativos, para actuar en la defensa de sus derechos.

"Cautio Judicatum Solvi"

Artículo 2:

Los nacionales de una de las dos Partes que sean demandantes o partes ante las autoridades judiciales de la otra Parte en materia civil, mercantil o administrativa, estarán dispensados de prestar caución o depósito alguno, cualquiera que sea su denominación, aun en el caso de que su domicilio o residencia habitual no se encuentre en territorio de una de ambas Partes.

Personas jurídicas

Artículo 3:

Lo dispuesto en el presente Convenio relativo a los nacionales de una de las Partes será aplicable, con sujeción a las disposiciones de orden público del Estado en que se promueva la acción, a las personas jurídicas constituidas conforme a la legislación de una de las Partes y que tengan su domicilio social en el territorio de la otra Parte.

Artículo 4:

1. El Ministerio de Justicia del Reino de España y el Ministerio de Justicia del Reino de Marruecos son designados Autoridades Centrales en el marco del presente Convenio.
2. Ambas Partes se comunicarán recíprocamente mediante Nota Verbal cualquier modificación en la designación de su Autoridad Central.
3. Dicha modificación surtirá efecto si no se formula oposición alguna por la otra Parte.

Asistencia judicial

Artículo 5:

Los nacionales de una de las Partes gozarán ante los tribunales de la otra Parte de la asistencia judicial, así como de la dispensa del pago adelantado de tasas y gastos judiciales concedida a los nacionales de esta última, teniendo en cuenta su situación personal, material y familiar y en iguales condiciones.

Las certificaciones relativos a los ingresos y a la situación personal, familiar y patrimonial del requirente deberán ser expedidas por la autoridad competente de la Parte en cuyo territorio aquél tuviera su domicilio o su residencia.

Dicha certificación será expedida por la autoridad diplomática o consular territorialmente competente, si el interesado reside en un tercer Estado.

La autoridad judicial que deba resolver sobre la solicitud de asistencia judicial podrá solicitar información complementaria a la autoridad que haya expedido la certificación.

TITULO II

ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA Documentos judiciales y extrajudiciales Comisiones rogatorias

Artículo 6

1- Los documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil, mercantil y administrativa, así como las comisiones rogatorias, que provengan de una de las Partes, se

enviarán, bien directamente por la Autoridad Central de la Parte requirente a la Autoridad Central de la Parte requerida, bien por conducto diplomático.

2- Las notificaciones y comisiones rogatorias deberán indicar:

- a- La autoridad judicial de la que provengan;
- b- La identidad, condición y profesión de las partes y, en la medida de lo posible, su nacionalidad, y la denominación social y su sede en el caso de personas jurídicas;
- c- El domicilio, la residencia o la dirección exacta de cada Parte, así como la de sus representantes o defensores, si hubiere lugar;
- d- La naturaleza de las notificaciones y de las comisiones rogatorias y su finalidad; y, en lo que respecta a las comisiones rogatorias, la naturaleza de los actos que deban llevarse a cabo y, cuando proceda, las preguntas que deban formularse a los testigos;
- e- Si la dirección de la persona a que se refiere la solicitud de asistencia judicial no se indicara con precisión o fuera inexacta, la autoridad requerida intentará averiguar la dirección exacta en la medida de lo posible.

Si la autoridad requerida no fuera competente, transmitirá de oficio el documento a la autoridad competente e informará de ello a la autoridad requirente.

Comunicación de documentos judiciales y extrajudiciales

Artículo 7:

La solicitud de notificación de un documento judicial o extrajudicial irá acompañada de dicho documento. La notificación se efectuará por mediación de la autoridad competente, conforme a la legislación del Estado requerido.

Artículo 8:

1. Podrá igualmente solicitarse de forma subsidiaria la notificación en una de las formas especiales previstas en el apartado 2 del presente artículo en el caso de que no fuera posible proceder a la entrega simple, debido a que el destinatario no acepte voluntariamente el documento.

2. Si la parte requirente lo solicita expresamente, la autoridad requerida efectuará la notificación en la forma prevista por su legislación interna para notificaciones análogas, o en una forma especial compatible con dicha legislación.

3. Los gastos de dicha notificación correrán a cargo del solicitante.

Artículo 9:

En el caso de que el Estado requirente no hubiera solicitado expresamente, tal como se prevé en el artículo 8 (apartado 2) de este Convenio, que el documento se comunique conforme a las formalidades prescritas en dicho artículo o si la notificación no hubiera podido hacerse por simple entrega conforme al artículo 7 del presente Convenio, el Estado requerido devolverá sin demora el documento al Estado requirente haciéndole saber el motivo por el cual la entrega simple no pudo tener lugar.

Artículo 10:

La prueba de la notificación se hará por medio de un recibo fechado y firmado por el destinatario o una declaración de la autoridad requerida haciendo constar el hecho, la forma y la fecha de la notificación.

El recibo o la declaración figurarán en una de las copias del documento que deba ser notificado, o se adjuntarán al mismo y serán remitidos a la Autoridad Central de la Parte requirente, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del presente Convenio.

Artículo 11:

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, cada Parte podrá transmitir directamente por mediación de sus agentes diplomáticos y consulares las notificaciones dirigidas a sus nacionales que se encuentren en territorio de la otra Parte, sin necesidad de utilizar la vía coercitiva.

Comisiones Rogatorias

Artículo 12:

1- Lo dispuesto en los artículos 8, 9, 10 y 11 del presente Convenio será aplicable a la ejecución de comisiones rogatorias en materia civil, mercantil y administrativa.

2- Las comisiones rogatorias serán enviadas por la Autoridad Central de la Parte requerida a la autoridad competente. Si la autoridad requerida no fuera competente, transmitirá de oficio la comisión rogatoria a la autoridad competente e informará de ello a la parte requirente.

Artículo 13:

Cada una de ambas Partes podrá igualmente hacer que se ejecuten las comisiones rogatorias directamente por mediación de sus agentes consulares o diplomáticos y sin hacer uso de medios coercitivos, cuando las personas que deban prestar testimonio o presentar documentos posean únicamente la nacionalidad de la Parte requirente.

La nacionalidad de la persona objeto de la comisión rogatoria se determinará conforme al derecho de la Parte en cuyo territorio deba ejecutarse la comisión rogatoria.

Cualquier citación o notificación que tenga por finalidad la presentación de documentos, deberá indicar expresamente que no se utilizarán medios coercitivos para ejecutar la comisión rogatoria.

Artículo 14:

La autoridad requerida podrá denegar la ejecución de una comisión rogatoria, si la misma, según su legislación, no fuera de su competencia o si fuera de tal naturaleza que pudiera perjudicar su soberanía, su seguridad o su orden público. En ambos casos, la Parte requerida deberá informar de este hecho a la autoridad requirente, indicando los motivos.

Artículo 15:

La autoridad requerida deberá informar a la autoridad requirente, a solicitud expresa de esta última, de la fecha y del lugar de ejecución de la comisión, a fin de que la parte interesada pueda comparecer en persona si lo desea o hacerse representar conforme a la legislación vigente en el Estado requerido.

Artículo 16:

La ejecución de comisiones rogatorias no podrán dar lugar al reembolso de gastos, cualquiera que sea la naturaleza de los mismos, salvo en el caso de los honorarios de peritos y gastos de peritación, cuyo importe y naturaleza se comunicarán a la Parte requirente. No obstante, la Parte requerida deberá poner en conocimiento del órgano de recepción de la Parte requirente el importe de los gastos en que se haya incurrido.

Artículo 17:

El procedimiento judicial a que dé lugar la ejecución de la comisión rogatoria conforme a las disposiciones precedentes producirá el mismo efecto jurídico que si aquélla se hubiera ejecutado ante la autoridad competente del Estado requirente.

Artículo 18:

Las comisiones rogatorias deberán ir acompañadas de una traducción auténtica en la lengua de la autoridad requerida.

Exequátur: Costas y gastos

Artículo 19:

La solicitud de exequátur de una resolución relativa a los gastos de procedimiento, conforme a los artículos 18 y 19 del Convenio de La Haya de 1 de marzo de 1954, podrá también ser enviada directamente por la Parte interesada a la autoridad judicial competente.

Artículo 20:

La competencia de las autoridades que hayan entregado los documentos previstos en el artículo 19 del Convenio de La Haya anteriormente mencionada no habrá de ser certificada por una autoridad superior.

Artículo 21:

Para acreditar que las resoluciones relativas a los gastos de procedimiento tienen fuerza de cosa juzgada, deberán ir acompañadas de:

1. un documento del que se desprenda que la resolución ha sido notificada a la parte contra la que se siga la ejecución;
2. una certificación que haga constar que la resolución no ha sido objeto de recurso ordinario ni de recurso de casación o que no pueda ya ser objeto de dichos recursos.

TITULO III
DEL RECONOCIMIENTO Y EJECUCION
DE RESOLUCIONES JUDICIALES
SENTENCIAS ARBITRALES
Y DOCUMENTOS AUTENTICOS

Artículo 22:

1. Las resoluciones judiciales en materia civil, mercantil y administrativa, comprendidas las que concedan indemnizaciones por daños y perjuicios por responsabilidad civil a las víctimas de infracciones penales, dictadas por órganos jurisdiccionales de alguno de ambos Estados Contratantes, tendrán autoridad de cosa juzgada y fuerza ejecutiva en el otro Estado, en las condiciones y según las modalidades establecidas por el presente título.
2. El presente Convenio no será aplicable a las resoluciones dictadas en las materias y casos siguientes:
 - a- En materia testamentaria y sucesoria;
 - b- En materia de quiebra, procedimientos de liquidación de sociedades u otras personas jurídicas insolventes, conciertos y convenios análogos entre deudores y acreedores;

c- Resoluciones contenciosas en materia de seguridad social, tal como está definida en el Convenio hispano-marroquí relativo a la seguridad social de 8 de noviembre de 1979;

d- En caso de medidas cautelares y provisionales, salvo las dictadas en materia de alimentos.

Artículo 23:

Las resoluciones judiciales en materia civil, mercantil y administrativa, dictadas por los órganos jurisdiccionales competentes de España y Marruecos, respectivamente, tendrán autoridad de cosa juzgada en el territorio del otro Estado, si reúnen las condiciones siguientes:

1- La resolución emana de un órgano jurisdiccional competente según las normas aplicables en el país en que hubiera sido dictada;

2- Las partes han sido legalmente citadas, representadas o declaradas rebeldes;

3- La resolución ha adquirido autoridad de cosa juzgada y ha llegado a ser ejecutiva conforme a las leyes del Estado en que haya sido dictada;

4- La resolución no contiene disposiciones contrarias al orden público del Estado en que se solicite la ejecución, ni a los principios del derecho internacional que sean aplicables en el mismo. Tampoco deberá ser contraria a una resolución judicial dictada en ese mismo Estado y que haya adquirido autoridad de cosa juzgada;

5- Que no se encuentre pendiente ningún proceso entre las mismas partes y por el mismo objeto ante algún órgano jurisdiccional del Estado requerido antes de iniciarse la acción ante el tribunal que haya dictado la resolución que deba ejecutarse.

Artículo 24:

Las resoluciones a que se refiere el artículo precedente no podrán dar lugar a ninguna medida de ejecución forzosa o coercitiva por parte de las autoridades del otro Estado, ni ser objeto por parte de dichas autoridades de ninguna publicidad o formalidad, tales como el registro, la inscripción o la rectificación en registros públicos, hasta después de haber sido declaradas ejecutivas en el territorio del Estado requerido.

Artículo 25:

La autoridad competente (el tribunal de primera instancia de cada uno de ambos Estados) concederá el derecho de ejecución de la resolución, a solicitud de la parte interesada, conforme a la legislación del Estado en que se solicite dicha ejecución.

El procedimiento de solicitud de ejecución se regirá por la ley del Estado en que se requiera la ejecución.

Artículo 26:

El tribunal competente se limitará a comprobar si la resolución cuya ejecución se solicita reúne todas las condiciones previstas en el artículo 23 para gozar de autoridad de cosa juzgada. Procederá de oficio a dicho examen y deberá hacer constar el resultado del mismo en su resolución.

Al aceptar la solicitud de ejecución, la autoridad competente ordenará, en su caso, las medidas necesarias para que la resolución dictada en el otro Estado reciba la misma publicidad que si hubiera sido dictada en el propio Estado en que haya sido declarada ejecutiva. La ejecución podrá concederse incluso parcialmente para alguna o algunas de las peticiones de la resolución invocada.

Artículo 27:

La decisión de ejecución producirá efecto contra todas las partes en el litigio que sean objeto de la resolución que deba ejecutarse y en toda la extensión del territorio en que sus disposiciones sean aplicables.

Igualmente permitirá que la sentencia declarada ejecutiva produzca los mismos efectos, en lo referente a las medidas de ejecución y a partir de la fecha de esa decisión, que si hubiera sido dictada por el tribunal que haya dictado la decisión de ejecución.

Artículo 28:

La Parte que invoque la autoridad de cosa juzgada de una resolución judicial o que reclame la ejecución de la misma, deberá presentar:

- 1- una copia de la resolución que reúna todas las condiciones necesarias para su autenticidad;
- 2- el original del documento de notificación de la resolución;
- 3- una certificación del secretario del tribunal que haga constar que la resolución no ha sido objeto de recurso ni de apelación;
- 4- una copia certificada conforme de la citación hecha a la parte que haya sido condenada en rebeldía.

Artículo 29:

Los laudos arbitrales dictados válidamente en uno de los dos Estados serán reconocidos en el otro Estado y podrán ser declarados ejecutivos en el mismo cuando

reúnan las condiciones previstas en el artículo 23 que les sean aplicables y si se cumplen además las siguientes condiciones:

1- la legislación del Estado requerido para la ejecución permite resolver esa clase de litigio por vía arbitral;

2- el laudo arbitral se ha dictado en cumplimiento de una cláusula o un contrato de arbitraje válidos y ha llegado a ser definitivo;

3- el contrato o la cláusula de arbitraje reconocía la competencia a los árbitros conforme a la legislación en cuya virtud se ha dictado el laudo.

Los laudos arbitrales deberán ser ejecutados en la misma forma indicada en los artículos precedentes.

Artículo 30:

Los documentos auténticos ejecutivos en uno de los dos Estados serán declarados ejecutivos en el otro, por el tribunal competente, según la legislación del Estado donde deba procederse la ejecución.

Dicho tribunal se limitará a comprobar que los documentos reúnen las condiciones necesarias para su autenticidad en el Estado que hayan sido extendidos y que las disposiciones cuya ejecución se insta no contiene nada contrario al orden público aplicable del Estado en que se solicita la ejecución, o a los principios de derecho aplicables en dicho Estado.

Artículo 31:

Las disposiciones previstas por los artículos del presente título no se aplicarán en ningún caso a las sentencias dictadas en uno de los dos Estados contra el

Gobierno del otro Estado o contra uno de sus funcionarios por actos cometidos únicamente en razón de sus funciones.

Tampoco podrán aplicarse a las sentencias cuya ejecución sea contraria a los tratados y convenios vigentes en el Estado en que se solicite.

Artículo 32:

No serán aplicables a los nacionales del otro Estado las normas por las que la legislación de uno de los dos Estados declara competentes a sus tribunales en razón únicamente de la nacionalidad del solicitante y sin otra causa de competencia en lo que se refiere a las impugnaciones relativas a obligaciones nacidas de un contrato o de un delito o de un cuasidelito, en los siguientes casos:

- 1- cuando el demandante tenga su domicilio o su residencia en el Estado del que sea nacional;
- 2- cuando la obligación haya nacido o deba ser ejecutada en el Estado del que sea nacional el demandante.

La presente disposición se aplicará de oficio por los órganos jurisdiccionales de cada uno de los dos Estados.

TITULO IV
INFORMACION JURIDICA
Disposición General

Artículo 33:

Las Partes Contratantes se comprometen a proporcionarse mutuamente, conforme a lo dispuesto en este Convenio, información acerca de sus legislaciones, sus

jurisprudencias respectivas en materia civil, mercantil y administrativa, así como acerca del marco del procedimiento civil y mercantil y de la organización judicial.

Se comprometen igualmente a comunicarse información sobre decisiones jurisprudenciales que conciernan a un punto determinado, así como cualquier otra información jurídica.

**Intercambio de información
sobre las legislaciones respectivas**

Artículo 34:

La Autoridad Central del Reino de España y la Autoridad Central del Reino de Marruecos se proporcionarán recíprocamente y previa solicitud, las informaciones relativas a sus legislaciones en los campos a que se refiere el artículo 33.

Artículo 35:

La solicitud de información deberá proceder, bien de una autoridad judicial, o bien, cuando se trate de la asistencia judicial, de la autoridad encargada de resolver sobre la concesión de dicha asistencia.

Artículo 36:

La solicitud de información deberá precisar la autoridad de la que proviene, así como la naturaleza del asunto. Deberá indicar de manera clara los asuntos sobre los que se solicita la información relativa a la legislación de la Parte requerida.

La solicitud deberá incluir una exposición de los hechos que permitan una buena comprensión y la elaboración de una respuesta clara y precisa. Podrán adjuntarse

a la misma copias de documentos, en la medida en que los mismos sean necesarios para precisar el alcance de la solicitud.

La solicitud podrá referirse, de modo complementario, a temas relativos a ámbitos diferentes a los que se refiere el artículo 33, cuando tengan relación con los temas principales de la solicitud.

La Parte requerida podrá solicitar la información complementaria necesaria para elaborar su respuesta.

Artículo 37:

1. La autoridad judicial de la que provenga la solicitud no se considerará obligada por la información contenida en la respuesta.

2. La respuesta a una solicitud de información deberá darse lo más rápidamente posible.

3. Dicha respuesta no dará lugar a ningún reembolso de tasas o gastos, cualquiera que sea su naturaleza.

**TITULO V
DE LA CERTIFICACIONES DE ACTAS
DEL REGISTRO CIVIL Y DOCUMENTOS OFICIALES**

Artículo 38:

A solicitud de las autoridades judiciales de una de las Partes, la otra Parte les transmitirá sin tasas ni gastos, las certificaciones de actas del registro civil y otros documentos referentes al mismo, en su caso, que conciernan a los nacionales de la Parte de que proceda la solicitud.

Artículo 39:

Las certificaciones de las actas del registro civil expedidas por una autoridad competente en el territorio de una de las Partes Contratantes y que estén provistas de su sello oficial no necesitarán ser legalizadas para ser válidas en el territorio de la otra Parte.

**TITULO VI
DISPOSICIONES COMUNES**

Dispensa de legalización

Artículo 40:

Los documentos que provengan de las autoridades judiciales o de otras autoridades de uno de ambos Estados, así como los documentos cuya fidelidad y fecha, veracidad de la firma o conformidad con el original certifiquen dichas autoridades, estarán dispensados de legalización o de cualquier otra formalidad equivalente cuando deban presentarse en territorio del otro Estado.

Los documentos deberán ir provistos de la firma y del sello oficial de la autoridad facultada para expedirlos, y en el caso de que se trate de copias, estar certificados conformes con el original por dicha autoridad. En cualquier caso, deberán estar extendidos materialmente de tal forma que resulte evidente su autenticidad.

En caso de existir serias dudas acerca de la autenticidad del documento, se efectuará una comprobación por mediación de la Autoridad Central de ambos Estados.

Lenguas y traducciones

Artículo 41:

Las dos Autoridades Centrales podrán redactar sus comunicaciones en sus lenguas respectivas. Se adjuntará a las mismas una traducción en lengua francesa.

Artículo 42:

Los documentos que deban ser notificados, las comisiones rogatorias, las resoluciones relativas a condenas en costas y gastos del procedimiento, las solicitudes de asistencia judicial, al igual que los documentos y solicitudes de información necesaria que se adjunten a los mismos, así como sus anejos, deberán estar redactados en la lengua de la Parte de la autoridad requerida o ir acompañados de una traducción en lengua francesa.

Artículo 43:

Las traducciones serán legalizadas por la autoridad competente de ambos Estados.

La traducción de las comunicaciones previstas en el artículo 42 del presente Convenio no dará lugar a ningún reembolso de gastos.

TITULO VII DISPOSICIONES FINALES

Artículo 44:

Cualquier controversia que se surja de la aplicación o de la interpretación del presente Convenio se resolverá por vía diplomática.

Artículo 45:

El presente Convenio entrará en vigor provisionalmente a partir de la fecha de su firma y definitivamente el primer día del segundo mes siguiente a la fecha de la última notificación en que se haga constar el cumplimiento de las formalidades constitucionales requeridas en cada uno de los dos Estados.

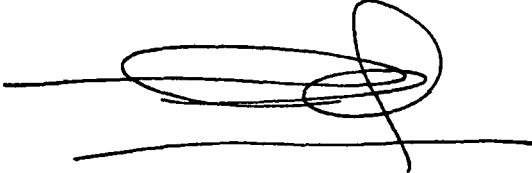
Artículo 46:

El presente Convenio se concluye por un tiempo de duración ilimitada. Cada una de las Partes podrá denunciarlo por medio de una notificación por escrito enviada por conducto diplomático a la otra Parte. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha de su envío.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios de ambos Estados Contratantes firman el presente Convenio.


Hecho en Madrid, el 30 de Mayo de 1997, en doble ejemplar, estando redactados los originales en español, en árabe y en francés, siendo igualmente auténticos los tres textos.

POR EL REINO DE ESPAÑA



Margarita Mariscal de Gante y Mirón
Ministra de Justicia

POR EL REINO DE MARRUECOS



Abderrahmane Amalou
Ministro de Justicia

المادة 46 :

تبرم هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة ويمكن لكل من الطرفين المتعاقدين الغائها في أي وقت بتوجيه اشعار كتابي بالالغاء للطرف الآخر بواسطة القناة الدبلوماسية ، ويسري مفعول هذا الالغاء سنة بعد تاريخ الاشعار المذكور .

واثباتا لذلك فقد وقعا مفوضا الدولتين الخول لهما هذه الاتفاقية .

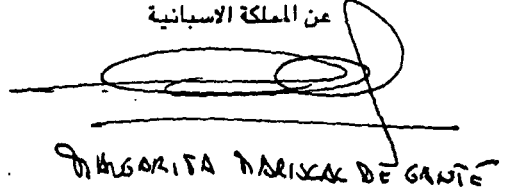
وحرر ب في في نظيرين
أصليين باللغات العربية والاسبانية والفرنسية ، وللنصوص الثلاثة نفس
الحجية .

عن الملكة المغربية



عبد الرزاق احال

عن الملكة الاسبانية



ISABELLA MARIA DE GARCIA

اللغات والترجمات

المادة 41 :

تصرر السلطتان المركزيتان مراسلاتهما بلغتهما وتضاف إليها ترج بالغة الفرنسية .

المادة 42 :

تصرر بلغة الدولة المطلوبة الانابات القضائية والاحكام الصادرة به صوائر ومصاريف الدعوى وغيرها من الوثائق وكذا الوثائق المدلى بها تأيد لطلب المساعدة القضائية وطلب المعلومات وملحقاتها كما ترفق بترجمة إلى اللغة الفرنسية .

المادة 43 :

يصادق على الترجمات من طرف السلطة المختصة بكلا البلدين .

لا يترتب عن ترجمة الوثائق المشار إليها في المادة 42 من هذه الاتفاقية أداء أية صوائر .

القسم السابع

مقتضيات ختامية

المادة 44 :

يسوى كل نزاع ينشأ عن تطبيق أو تأويل هذه الاتفاقية عبر القناة الدبلوماسية .

المادة 45 :

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ مؤقنا ابتداء من تاريخ التوقيع عليها ونهائيا في اليوم الاول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ آخر اشعار لاستكمال الاجراءات الدستورية المطلوبة في كلا البلدين .

القسم الخامس
موجز عقود الحالة المدنية والوثائق الرسمية
* * *

المادة 38 :

يوجه أحد الطرفين للطرف الآخر بناء على طلب من سلطاته القضائية وبدون صوائر أو رسوم ووثائق أو موجزا من عقود الحالة المدنية تهم مواطني الطرف الطالب .

المادة 39 :

إن موجز عقود الحالة المدنية المسلم من سلطة مختصة فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين والمهور بالطابع الرسمي لا يتوقف على التصديق فوق تراب الطرف الآخر .

القسم السادس
مقتضيات مشتركة
* * *
الاعفاء من التصديق
* * *

المادة 40 :

تعفى من التصديق أو من أي إجراء مماثل الوثائق الصادرة عن السلطات القضائية أو السلطات الأخرى لأحدى الدولتين وكذا الوثائق التي تشهد بصحتها وتاريخها وصحة توقيعها أو مطابقتها للأصل عند الإدلاء بها فوق تراب الدولة الأخرى .

يجب أن تكون الوثائق موقعا عليها من طرف السلطة المختصة بإصدارها ومهورة بطابعها الرسمي ، فإن تعلق الأمر بنسخ يجب أن يكون مصادقا عليها بما يفيد مطابقتها للأصل ، وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون مظهرها المادي كاشفا عن صحتها .

وفي حالة وجود شك جدي حول صحة الوثيقة يتم التحقق من ذلك بواسطة السلطة المركزية للبلدين .

المادة 35 :

يتعين أن يكون طلب المعلومات صادرا عن سلطة قضائية أو من السلطة المكلفة بالبث في منح المساعدة القضائية إذا تعلق الأمر بها .

المادة 36 :

يجب أن يتضمن طلب المعلومات التي صدر عنها وكذا نوع القضية ، كما يبين بكيفية دقيقة النقاط التي هي موضوع الطلب في قانون الدولة المطلوبة .

يرفق الطلب بعرض عن الوقائع الضرورية توضيحا للسؤال حتى يكون الجواب صحيحا مطابقا ودقيقا ، ويمكن أن يضاف إليه نسخ من كل المستندات التي هي ضرورية لتوضيح فحوى الطلب .

يمكن بصفة تكميلية أن ينصب السطلب على نقط تخص مجالات غير تلك المشار إليها في المادة 33 إذا كانت لها علاقة بالمواضيع الأساسية للطلب .

يمكن للطرف الطالب أن يطلب معلومات إضافية إذا كانت ضرورية لانجاز جوابه .

المادة 37 :

1 - لا تلزم المعلومات التي تضمنها الجواب السلطة الصادر عنها للطلب .

2 - يتعين أن يكون الجواب عن المعلومات المطلوبة في أقرب وقت ممكن .

3 - لا تؤدي مصاريف عن الرد بالمعلومات المطلوبة أيا كان نوعها .

ولا يمكن أن تطبق كذلك على الاحكام التي يكون تنفيذها مخالفا
للاتفاقيات والمعاهدات المعمول بها في الدولة المطلوب فيها .

المادة 32 :

لا تطبق القواعد التشريعية التي تجعل محاكم احدى الدولتين المتعاقدين
مختصة بسبب جنسية الطالب فقط في النزاعات المتعلقة بالالتزامات الناتجة
عن عقد أو جنحة أو شبه جنحة على رعايا الدولة الاخرى في الحالات التالية :

- 1 - إذا كان موطن المدعى عليه أو محل سكنه في بلده .
- 2 - إذا كان الالتزام قد نشأ وأصبح قابلا للتنفيذ في بلد المدعى عليه .

تطبق هذه المقتضيات تلقائيا من طرف محاكم كل من الدولتين .

القسم الرابع
المعلومات القانونية
* * *

مقتضيات عامة
* * *

المادة 33 :

يَتَعَهَد الطرفان المتعاقدان بتبادل المعلومات حول تشريعاتهما والاجتهادات
القضائية في المواد المدنية والتجارية والادارية وكذا في اطار المسطرة المدنية
والتجارية والتنظيم القضائي طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية .

ويتعهدان كذلك بتبادل المعلومات حول الاجتهادات القضائية المتعلقة
بحالات معينة وكذلك بخصوص أية معلومة قضائية .

تبادل المعلومات في مجال التشريع
* * *

المادة 34 :

يجوز للسلطة المركزية في كل من الدولتين أن يتبادلا فيما بينهما وبناء
على طلب معلومات بشأن تشريعاتهما في المواد المشار إليها في المادة 33 .

المادة 29 :

يعترف بالمقررات التحكيمية الصادرة بصفة قانونية في احدى
في الدولة الاخرى ، ويمكن أن تصبح قابلة للتنفيذ إذا استوفت
المنصوص عليها في المادة 23 إذا كانت خاضعة لها وإذا توفرت أيضا
التالية :

1 - أن يسمح قانون الدولة المطلوب فيها التنفيذ تسوية النزاع ،
التحكيم .

2 - أن يكون المقرر التحكيمي أصبح نهائيا وصادرا تنفيذا لشرط
تحكيم صحيح .

3 - إذا منح العقد أو الشرط التحكيمي الاختصاص إلى المحكم
للقانون الذي صدر بموجبه المقرر .

تنفذ المقررات التحكيمية وفق نفس الاجراءات المنصوص عليه في
السابقة .

المادة 30 :

إن المحررات الرسمية القابلة للتنفيذ في احد البلدين يعلن عن ق
تنفيذها في البلد الآخر من طرف المحكمة المختصة تبعا لقانون البلد الذي
أن يباشر فيه التنفيذ .

وتنحصر مهمة المحكمة في التأكد من كون المحررات تشتمل علم
الشروط الضرورية لرسميتها في البلد الذي انجزت فيه ، وما إذا ك
المقتضيات موضوع التنفيذ لا تتنافى مع النظام العام للبلد المطلوب
التنفيذ أو مع مبادئ القانون المطبقة في هذا البلد .

المادة 31 :

لا تطبق مقتضيات المواد الواردة في هذا القسم في أية حالة من الاحر
على الاحكام الصادرة في احدى الدولتين في مواجهة حكومة الدولة الاخرى
في مواجهة أحد موظفيها بشأن الافعال التي قاموا بها أثناء مزاولتهم لمهامهم

المادة 26 :

تقتصر المحكمة المختصة على البحث فيما إذا كان المقرر المطلوب تنفيذاً مستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة 23 لتكون له حجية المقتضى به ، وتقوم تلقائياً بهذا البحث وتثبت نتيجته في المقرر .

وللمحكمة المختصة إذا قبلت التنفيذ أن تأمر ان اقتضى الحال باتخاذ التدابير اللازمة لاشهار المقرر الوارد من البلد الآخر كما لو كان صادراً من البلد المعلن فيه عن قابلية تنفيذه .

ويمكن أيضاً أن يعطى التنفيذ جزئياً لبعض محتويات المقرر المذكور .

المادة 27 :

يسري مفعول مقرر التنفيذ على جميع الخصوم في الدعوى المطرقة تنفيذ الحكم فيها وعلى مجموع التراب المطبقة فيه هذه المقتضيات . ويسري كذلك للحكم الذي أصبح نافذاً بأن تكون له ابتداءً من تاريخ الحصول على مقر التنفيذ فيما يخص اجراءات التنفيذ نفس الآثار كما لو كان صادراً عن المحكمة التي أعطت التنفيذ في تاريخ الحصول عليه .

المادة 28 :

يتعين على الطرف الذي يحتج بما لمقرر قضائي من حجية الشيء المقضي به أو الذي يطلب التنفيذ أن يدلي بما يلي :

أ - نسخة من المقرر تتوفر على الشروط اللازمة لرسميتها .

ب - أصل وثيقة تبليغ المقرر .

ج - شهادة من كتابة الضبط للمحكمة تثبت أن المقرر لم يكن موضوعاً تعرض أو استئناف .

د - نسخة مصادق عليها من الاستدعاء الموجه للطرف المحكوم عليه غيابياً .

المادة 23 :

تكون المقررات القضائية في المواد المدنية والتجارية والادارية الصادرة عن المحاكم بالمغرب أو باسبانيا حجية الشيء المقضي به فوق تراب البلد الأخر إذا توفرت فيها الشروط التالية :

- 1 - أن تكون صادرة عن محكمة مختصة وفقا للقواعد المطبقة بالبلد الذي صدرت فيه .
- 2 - أن يتم بصفة قانونية استدعاء الاطراف أو تمثيلهم أو اثبات تفييهم .
- 3 - أن يكون المقرر قد اكتسب قوة الشيء المقضي به وأصبح قابلا للتنفيذ وفقا لتشريعات البلد الذي صدر به .
- 4 - أن لا يتضمن المقرر ما يخالف النظام العام للبلد الذي طلب فيه التنفيذ ولا بمبادئ القانون الدولي الجاري به العمل بالبلد المطلوب ، كما لا يمكنه أن يتعارض مع مقرر قضائي صدر بهذا البلد واكتسب به حجية الشيء المقضي به .
- 5 - أن لا تكون هناك منازعة راجحة بين نفس الاطراف وفي نفس الموضوع معروضة أمام جهة قضائية في الدولة المطلوبة قبل اقامة الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت المقرر المطلوب تنفيذه .

المادة 24 :

لا يمكن تنفيذ المقررات المشار إليها في المادة السابقة جبرا أو عن طريق الاكراه من طرف سلطات الدولة الأخرى ، كما لا يمكنها أن تكون موضوع أي اشهار أو أي اجراء بالتسجيل أو التقييد أو التصحيح بالسجلات العمومية إلا بعد الاعلان عن قابلية تنفيذها فوق تراب الدولة المطلوبة .

المادة 25 :

يتم تنفيذ المقرر القضائي بناء على طلب يقدمه الطرف المستفيد بواسطة السلطة المختصة المطلوب منها التنفيذ (المحكمة الابتدائية في كلتا الدولتين) وذلك طبقا لقانون البلد الذي قدم فيه الطلب .

تخضع مسطرة طلب التنفيذ لقانون البلد الذي طلب فيه .

المادة 21 :

لاضفاء قوة الشيء المقضي به على المقررات المتعلقة بالصواع
يتوجب الادلاء بالوثائق الآتية :

- 1 - وثيقة يستخلص منها أن المقرر قد بلغ إلى الطرف المنفذ
- 2 - شهادة تثبت أن المقرر لم يكن محل طعن عادي أو طعن بال
يمكن أن يطعن فيه بأي طريق من هذه الطرق .

القسم الثالث

**الاعتراف وتنفيذ الاحكام القضائية
والمقررات التحكيمية والعقود الرسمية**

المادة 22 :

1 - تكتسي قوة الشيء المقضي به والقوة التنفيذية في الدول
الاحكام القضائية الصادرة عن إحدى محاكم الدولتين المتعاقبتين ف
المدنية والتجارية والإدارية بما فيها تلك التي تمنع تعويضات عن الم
المدنية لضحايا أفعال جنائية وفق الشروط والشكليات المحددة في هذا الذ

2 - لا تطبق هذه الاتفاقية على المقررات الصادرة في المواد الآتية :

أ - الوصايا والمواريث .

ب - الافلاس ، ومسطرة تصفية الشركات أو غيرها من الأشخ
الاعتبارية المعسرة ، والصلح بين المدين والدائنين من نفس الدرجة .

ج - القرارات النزاعية في مادة الضمان الاجتماعي وفق تعريفها الر
في الاتفاقية المغربية الاسبانية المتعلقة بالضمان الاجتماعي المؤرخة ب
نونبر 1979 .

د - التدابير التحفظية والاجراءات الوقتية غير الصادرة في ما
النفقة .

المادة 16 :

لا يترتب على تنفيذ الانابات القضائية الحق في استرجاع مصاريف مهما كانت طبيعتها ماعدا ما يتعلق باتعاب الخبراء ومصاريف الخبرة والتي يشعر الطرف الطالب ببيلفها وطبيعتها . وفي هذه الحالة يتعين على الطرف المطلوب أن يشعر الجهة المكلفة بالتلقي لدى الطرف الطالب بمبلغ المصاريف التي يتعين تسديدها .

المادة 17 :

تكون لاجراءات تنفيذ الانابات القضائية وفقا للاحكام المشار إليها سابقا نفس الاثار القانونية كما لو تم تنفيذها من طرف السلطة المختصة لدى الدولة الطالبة .

المادة 18 :

يجب أن ترفق الانابات القضائية بترجمة رسمية بلغة الدولة المطلوبة .

اهفاء الصيغة التنفيذية مصاريف ورسوم
* * *

المادة 19 :

يمكن أن يوجه طلب تذييل مقرر يتعلق بمصاريف المسطرة بالصيغة التنفيذية مباشرة من قبل الطرف المعني إلى السلطة القضائية المختصة وذلك طبقا للفصلين 18 و 19 من اتفاقية لاهاي المؤرخة في 1 مارس 1954 .

المادة 20 :

ان اختصاص السلطات التي تسلم الوثائق المبينة في الفصل 19 من اتفاقية لاهاي المشار إليها في المادة السالفة لا يحتاج إلى اشهاد من طرف سلطة عليا .

الانابات القضائية

المادة 12 :

1 - تطبق مقتضيات المواد 8 و 9 و 10 و 11 من هذه الاتفاقية على تد الانابات القضائية في المواد المدنية والتجارية والإدارية .

2 - توجه الانابات القضائية إلى السلطة المختصة من طرف السلا المركزية للطرف المطلوب ، غير أنه إذا اعتبرت السلطة المطلوبة بأنها غير مختصة توجه الانابة القضائية تلقائيا إلى السلطة المختصة وتشعر بذلك الطر الطالب .

المادة 13 :

يمكن لكل من الطرفين أن ينفذ الانابات القضائية مباشرة بواسطة أعوان الدبلوماسيين أو القنصلين وبدون أي اكراه إذا كان الاشخاص الذين يتوجب عليهم ايداع أو تقديم وثائق يملكون فقط جنسية الطرف الطالب .

تحدد جنسية الشخص موضوع الانابة القضائية طبقا لتشريع الدولة التي يجب أن تنفذ فيها الانابة القضائية .

تتضمن الاعلانات أو التبليغات المتعلقة بتقديم وثائق بيانات تفيد صراحة إلى عدم استعمال أي اكراه في تنفيذ الانابة القضائية .

المادة 14 :

يمكن للسلطة المطلوبة أن ترفض تنفيذ انابة قضائية إذا كانت تعتبر حسب تشريعها غير مختصة أو إذا كان من شأنها أن تمس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام . في كلتا الحالتين يتعين على الطرف المطلوب اخبار الطرف الطالب مع بيان أسباب الرفض .

المادة 15 :

يتوجب على السلطة المطلوبة بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة اخبار هذه الاخيرة بتاريخ ومكان تنفيذ الانابة حتى يتسنى للطرف المعني أن يتمكن من الحضور شخصيا إذا رغب في ذلك أو أن يمثله وكيله طبقا للتشريع الجاري به العمل في الدولة المطلوبة .

المادة 8 :

يمكن أن يطلب التبليغ بأحدى الطرق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة ، كما يمكن أن يطلب أيضا بصفة احتياطية في الحالة التي يتعذر فيها التبليغ العادي إذا لم يقبل المبلغ له الوثيقة بصفة إرادية .

2 - إذا تعلق الأمر بتبليغ وثائق مماثلة تقوم السلطة المطلوبة بالتبليغ بانجاز الاجراء وفق أحكام قانونها الداخلي أو وفق مقتضيات مطابقة لقانونيه وذلك بطلب صريح من طرف الطالب .

3 - تكون صوائر هذا التبليغ على عاتق الطالب .

المادة 9 :

إذا لم تطلب الدولة الطالبة صراحة تبليغ الطي وفق الأشكال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 8 من هذه الاتفاقية ، أو إذا تعذر انجاز التبليغ بالتسليم العادي وفق مقتضيات المادة 7 فإن الدولة المطلوبة ترجع في أقرب الأجل الوثيقة إلى الدولة الطالبة وتبين لها الأسباب التي حالت دون انجاز هذا التبليغ .

المادة 10 :

يتم اثبات التبليغ بواسطة وصل مؤرخ وموقع عليه من طرف المرسل إليه أو بواسطة تصريح من السلطة المطلوبة التي عاينت واقعة وشكل وتاريخ التبليغ .

يوجه الوصل أو التصريح إلى السلطة المركزية للطرف الطالب طبقا لمقتضيات المادة 6 من هذه الاتفاقية .

المادة 11 :

يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين - بالرغم من أحكام المواد السابقة - أن يوجه مباشرة ودون اكراه بواسطة ممثليهما الدبلوماسيين والقنصلين التبليغات الموجهة إلى رعاياهما المتواجدين فوق تراب الطرف الآخر .

القسم الثاني
التعاون القضائي في المواد المدنية
والتجارية والإدارية
الأوراق القضائية وغير القضائية
والإتابات القضائية

المادة 6 :

1 - ترسل الأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والإدارية وكذا الإتابات القضائية إما مباشرة من طرف السلطة المركزية للطرف الطالب إلى السلطة المركزية للطرف المطلوب وإما بواسطة القناة الدبلوماسية.

2 - يجب أن تشير التبليغات والإتابات القضائية إلى مايلي :

- أ - السلطة القضائية التي صدرت عنها ؛
 - ب - هوية وصفة ومهنة الأطراف وعند الاقتضاء جنسيتهم وإذا تعلق الأمر بأشخاص اعتبارية تبيان عناوينهم التجارية ومقارهم الاجتماعية .
 - ج - سكنى أو إقامة أو عنوان كل طرف بدقة وكذا نفس البيانات عند وجود ممثلهم أو دفاعهم .
 - د - نوعية التبليغات والإتابات القضائية وموضوعها ، ونوعية الإجراءات المطلوب اتخاذها والأسئلة التي ينبغي طرحها على الشهود عند الاقتضاء .
 - و - البحث عن العنوان المضبوط قدر الامكان من طرف السلطة المطلوبة إذا كان عنوان الشخص المعني بالأمر غير مبين بدقة أو غير صحيح .
- إذا كانت السلطة المطلوبة غير مختصة فإنها توجه تلقائيا الوثيقة إلى السلطة المختصة وتشعر السلطة الطالبة بذلك .

تبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية

المادة 7 :

يرفق طلب تبليغ الطي القضائي أو غير القضائي بالوثيقة المطلوب تبليغها وينجز الاجراء بواسطة السلطة المختصة طبقا لتشريع الدولة المطلوبة .

الأشخاص الاعتبارية

المادة 3 :

إن مقتضيات هذه الاتفاقية تطبق - مع مراعاة النظام العام للدولة التي أقيمت بها الدعوى - على الأشخاص الاعتبارية التي أسست وفق أحكام قانون أحد الطرفين المتعاقدين والموجود مقرها الاجتماعي فوق تراب الطرف الآخر .

المادة 4 :

- 1 - تعين في إطار هذه الاتفاقية وزارتا العدل بالمملكة المغربية والمملكة الإسبانية بصفتها سلطة مركزية .
- 2 - عند تغيير في تعيين السلطة المركزية يشمر بمذكرة كل طرف متعاقد الطرف الآخر .
- 3 - يصبح هذا التغيير ساري المفعول إذا لم يقدم أي اعتراض عليه من قبل الطرف الآخر .

في المساعدة القضائية

المادة 5 :

يستفيد رعايا كل طرف من الطرفين المتعاقدين أمام محاكم الطرف الآخر من المساعدة القضائية وكذا الإعفاء من الرسوم والمصاريف القضائية المخولة لرعايا تلك الدولة اعتبارا لوضعيتهم الشخصية والمالية والعائلية وفق نفس الشروط .

تسلم الشواهد المثبتة لعدم كفاية الموارد الشخصية والوضعية العائلية والمالية لطالبيها من طرف سلطات محل مسكنه أو مكان إقامته .
تسلم هذه الشهادة من طرف السلطة الدبلوماسية أو القنصلية المختصة محليا إذا كان المعني بالأمر يقيم بدولة أخرى .

يمكن للسلطة القضائية المدعوة للبت في طلب المساعدة القضائية الحصول على معلومات تكميلية لدى سلطات الدولة التي سلمت هذه الشهادة .

[ARABIC TEXT — TEXTE ARABE]

اتفاقية بين المملكة الإسبانية والمملكة المغربية
بشأن التعاون القضائي
في المواد المدنية والتجارية والإدارية
* * * *

إن المملكة الإسبانية والمملكة المغربية ،
رغبة منهما في تنمية وتمتين علاقات الصداقة التقليدية والتعاون الدولي بين
البلدين ،

اعتبارا إلى أن إقرار نظام الاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية من شأنه
تعزيز الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية للبلدين .

قررتا إبرام اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية
واتفقتا على المقتضيات التالية :

القسم الأول

مقتضيات عامة
* * *

اللجوء إلى المحاكم
* * *

المادة 1 :

يكون لرعايا دولة على تراب الدولة الأخرى ، حق في اللجوء بحرية
وسهولة إلى المحاكم سواء الإدارية أو القضائية من أجل تتبع حقوقهم ومصالحهم
والدفاع عنها .

في كفاية التقاضي
* * *

المادة 2 :

ان رعايا أحد الطرفين المتعاقدين سواء كانوا طالبين أو خصوما أمام
السلطات القضائية لدى الدولة الأخرى في المواد المدنية والتجارية والإدارية
يعفون من أية كفاية أو إيداع تحت أي اسم كان ، ولو في حالة عدم وجود موطن
أو مقر إقامة لهم على تراب الدولة الأخرى .

[FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS]

CONVENTION DE COOPÉRATION JUDICIAIRE, EN MATIÈRE CIVILE,
COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE ENTRE LE ROYAUME
D'ESPAGNE ET LE ROYAUME DU MAROC

Le Royaume d'Espagne et Le Royaume du Maroc,

Soucieux de promouvoir et de renforcer les rapports d'amitié traditionnels et de coopération judiciaire entre les deux pays.

Considérant que l'établissement d'un système de reconnaissance et d'exécution des décisions judiciaires permettra de stimuler la confiance réciproque dans leurs institutions judiciaires.

Sont convenus de conclure une Convention de coopération judiciaire en matière civile, commerciale et administrative et adoptent à cet effet les dispositions suivantes :

TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DE L'ACCÈS AUX TRIBUNAUX

Article 1

Les nationaux de chacun des deux Etats auront sur le territoire de l'autre, libre et facile accès auprès des tribunaux tant administratifs que judiciaires, pour la poursuite de la défense de leurs droits.

"CAUTIO JUDICATUM SOLVI"

Article 2

Les nationaux de l'une des deux Parties qui sont demandeurs ou parties devant les autorités judiciaires de l'autre Partie en matière civile, commerciale ou administrative, seront dispensés de toute caution ou dépôt sous quelque dénomination que ce soit, même quand leur domicile ou résidence habituelle ne se trouve pas sur le territoire de l'une des deux Parties.

PERSONNES MORALES

Article 3

Les dispositions de la présente Convention relatives aux nationaux de l'une des parties s'appliqueront, sous réserve des dispositions d'ordre public de l'Etat où l'action est introduite, aux personnes morales constituées conformément à la législation de l'une des Parties et ayant leur siège social sur le territoire de l'autre Partie.

Article 4

1. Le Ministère de la Justice du Royaume du Maroc et le Ministère de la Justice du Royaume d'Espagne sont désignés comme autorité centrale dans le cadre de la présente Convention.

2. Chaque Partie communiquera à l'autre Partie par note verbale tout changement dans la désignation de son autorité centrale.

3. Ce changement prendra effet s'il n'y a aucune opposition de la part de l'autre Partie.

ASSISTANCE JUDICIAIRE

Article 5

Les nationaux de l'une des Parties bénéficieront devant les tribunaux de l'autre Partie, de l'assistance judiciaire ainsi que de la dispense de l'avance des taxes et des frais judiciaires, accordées aux nationaux de cette dernière, compte tenu de leur situation personnelle, matérielle et familiale et dans les mêmes conditions.

Les certificats relatifs aux revenus et à la situation personnelle, familiale et patrimoniale du requérant doivent être délivrés par l'autorité compétente de la Partie sur le territoire de laquelle celui-ci a son domicile ou sa résidence.

Ce certificat sera délivré par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente, si l'intéressé réside dans un pays tiers.

L'autorité judiciaire appelée à statuer sur la demande d'assistance judiciaire peut demander des renseignements complémentaires à l'autorité qui a délivré le certificat.

TITRE II. ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE,
COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

ACTES JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES COMMISSIONS ROGATOIRES

Article 6

1. Les actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile, commerciale et administrative, ainsi que les commissions rogatoires, provenant de l'une des Parties, seront envoyés soit directement par l'autorité centrale de la Partie requérante à l'autorité centrale de la Partie requise, soit par voie diplomatique.

2. Les notifications et commissions rogatoires devront indiquer :

a. L'autorité judiciaire dont elles émanent;

b. L'identité, la qualité et la profession des parties et, dans la mesure du possible, leur nationalité et dans le cas des personnes morales, leur raison sociale et leur siège;

c. Le domicile, la résidence ou l'adresse exacte de chaque partie ainsi que ceux de leurs représentants ou défenseurs, s'il y a lieu;

d. La nature des notifications, des commissions rogatoires et leur objet; et en ce qui concerne les commissions rogatoires, la nature des actes à accomplir et, s'il y a lieu, les questions à poser aux témoins;

e. Si l'adresse de la personne concernée par la demande d'entraide judiciaire n'est pas indiquée avec précision ou si elle est inexacte, l'autorité requise recherchera l'adresse exacte dans la mesure du possible.

Si l'autorité requise est incompétente, elle transmettra d'office le document à l'autorité compétente et en informera l'autorité requérante.

COMMUNICATION DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES

Article 7

La demande de notification d'un acte judiciaire ou extra-judiciaire sera accompagnée dudit acte. La notification s'effectuera par l'intermédiaire de l'autorité compétente, conformément à la législation de l'Etat requis.

Article 8

1. La notification dans l'une des formes spéciales prévues à l'alinéa 2 du présent article, pourra également être demandée de façon subsidiaire, au cas où la remise simple ne serait pas possible, parce que le destinataire n'accepte pas le document volontairement.

2. Si la Partie requérante le demande expressément, l'autorité requise effectuera la notification dans la forme prévue par sa législation interne pour des notifications analogues, ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.

3. Les frais de cette notification seront à la charge du demandeur.

Article 9

Si l'Etat requérant n'a pas demandé expressément, tel qu'il est prévu à l'article 8 (al. 2) de cette Convention, que le document soit communiqué conformément aux formes prescrites dans cet article ou si la notification n'a pas pu se faire par simple remise conformément à l'article 7 de la présente Convention, l'Etat requis renverra sans délai le document à l'Etat requérant en lui faisant connaître le motif pour lequel la remise simple n'a pas pu avoir lieu.

Article 10

La preuve de la notification se fera au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de l'autorité requise constatant le fait, la forme et la date de la notification.

Le récépissé ou la déclaration figureront sur l'une des copies du document qui doit être notifié, ou seront joints à celui-ci et seront transmis à l'autorité centrale de la Partie requérante, conformément aux dispositions de l'article 6 de cette Convention.

Article 11

Sans préjudice des dispositions des articles précédents, chaque Partie pourra transmettre directement par l'intermédiaire de ses agents diplomatiques et consulaires, les notifications adressées à ses nationaux qui se trouvent sur le territoire de l'autre Partie, sans utiliser la voie de contrainte.

COMMISSIONS ROGATOIRES

Article 12

1. Les dispositions des articles 8, 9, 10 et 11 de la présente Convention seront applicables à l'exécution des commissions rogatoires en matière civile, commerciale et administrative.

2. Les commissions rogatoires seront adressées par l'autorité centrale de la Partie requise à l'autorité compétente. Si l'autorité requise est incompétente, elle transmettra d'office la commission rogatoire à l'autorité compétente et en informera la Partie requérante.

Article 13

Chacune des deux Parties pourra également faire exécuter les commissions rogatoires directement par l'intermédiaire de ses agents consulaires ou diplomatiques et sans faire usage de la contrainte, si les personnes qui doivent déposer ou qui doivent présenter des documents possèdent uniquement la nationalité de la Partie requérante.

La nationalité de la personne objet de la commission rogatoire sera établie conformément au droit de la Partie sur le territoire de laquelle la commission rogatoire doit être exécutée.

Toute citation ou assignation en vue de la présentation de documents, devra indiquer expressément que l'on n'utilisera pas la voie de contrainte pour exécuter la commission rogatoire.

Article 14

L'autorité requise pourra refuser d'exécuter une commission rogatoire si, d'après sa législation, celle-ci n'est pas de sa compétence ou si elle est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public. Dans les deux cas, la Partie requise doit informer de ce fait l'autorité requérante en lui indiquant les motifs.

Article 15

Sur demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité requise devra informer l'autorité requérante de la date et du lieu d'exécution de la commission, afin que la partie intéressée puisse comparaître en personne si elle le désire, ou se faire représenter conformément à la législation en vigueur dans l'Etat requis.

Article 16 :

L'exécution des commissions rogatoires ne pourra pas donner lieu au remboursement des frais, quelque soit la nature de ceux-ci, sauf dans le cas des honoraires d'experts et des frais d'expertise dont le montant et la nature seront communiqués à la Partie requérante. Cependant, la Partie requise devra porter à la connaissance de l'organe de réception de la Partie requérante le montant des frais occasionnés.

Article 17

La procédure judiciaire à laquelle donnera lieu l'exécution de la commission rogatoire conformément aux dispositions précédentes, produira le même effet juridique que si elle était exécutée auprès de l'autorité compétente de l'Etat requérant.

Article 18

Les commissions rogatoires devront être accompagnées d'une traduction authentique dans la langue de l'autorité requise.

EXEQUATUR : FRAIS ET DÉPENS

Article 19

La demande d'exequatur d'une décision relative aux frais de procédure, conformément aux articles 18 et 19 de la Convention de La Haye du 1^{er} mars 1954, pourra également être envoyée directement par la Partie intéressée à l'autorité judiciaire compétente.

Article 20

La compétence des autorités ayant remis les documents prévus à l'article 19 de la Convention de La Haye susmentionnée ne devra pas être certifiée par une autorité supérieure.

Article 21

Pour établir que les décisions relatives aux frais de procédure, sont passées en force de chose jugée, elles seront accompagnées :

1. D'un document dont il résulte que la décision a été signifiée à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie;
2. D'une attestation établissant que la décision ne fait l'objet ni d'un recours ordinaire ni d'un pourvoi en cassation ou ne peut plus faire l'objet d'un tel recours ou pourvoi.

TITRE III. DE LA RECONNAISSANCE ET DE L'EXÉCUTION DES
DÉCISIONS JUDICIAIRES DES SENTENCES ARBITRALES
ET DES ACTES AUTHENTIQUES

Article 22

1. Dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, les décisions judiciaires rendues en matière civile, commerciale et administrative, y compris celles qui allouent des dommages intérêts pour responsabilité civile aux victimes d'infractions pénales, rendues par les juridictions de l'un des deux Etats contractants, auront autorité de chose jugée et force exécutoire dans l'autre Etat.

2. La présente Convention ne s'applique pas aux décisions rendues dans les matières et cas suivants :

- a. En matière testamentaire et successorale;
- b. En matière de faillite, procédures de liquidation de sociétés ou autres personnes morales insolvables, concordats entre le débiteur et les créanciers analogues;
- c. Décisions contentieuses en matière de sécurité sociale, telles que définies par la Convention maroco-espagnole relative à la sécurité sociale du 8 novembre 1979;
- d. En cas de mesures conservatoires et de mesures provisoires, sauf celles rendues en matière d'aliments.

Article 23

En matière civile, commerciale et administrative, les décisions judiciaires rendues par les juridictions siégeant respectivement au Maroc et en Espagne, auront l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes :

1. La décision émane d'une juridiction compétente selon les règles applicables dans le pays où elle a été rendue;

2. Les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes;

3. La décision a acquis l'autorité de la chose jugée et est devenue exécutoire conformément aux lois du pays où elle a été rendue;

4. La décision ne contient pas de dispositions contraires à l'ordre public du pays où son exécution est demandée, ni aux principes du droit international qui y sont applicables. Elle n'est pas non plus contraire à une décision judiciaire rendue dans ce même Etat et ayant acquis l'autorité de la chose jugée;

5. Aucun procès engagé entre les mêmes parties et pour le même objet ne doit être en cours auprès de l'une des juridictions de l'Etat requis avant l'action en justice devant le tribunal qui a rendu la décision à exécuter.

Article 24

Les décisions visées à l'article précédent ne peuvent donner lieu à aucune mesure d'exécution forcée ou de coercition par les autorités de l'autre Etat, ni faire l'objet de la part

de ces autorités d'aucune publicité ou de formalité telle que l'enregistrement, l'inscription ou la rectification sur les registres publics, qu'après avoir été déclarées exécutoires sur le territoire de l'Etat requis.

Article 25

Le droit d'exécution de la décision est accordé sur demande de la partie intéressée par l'autorité compétente (le Tribunal de Première Instance de chacun des deux Etats), conformément à la loi de l'Etat où cette exécution est demandée.

La procédure de la demande d'exécution est régie par la loi de l'Etat où l'exécution est requise.

Article 26

La juridiction compétente se borne à vérifier si la décision dont l'exécution est demandée, remplit toutes les conditions prévues à l'article 23 pour jouir de l'autorité de la chose jugée. Elle procède d'office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision.

En acceptant la demande d'exécution, l'autorité compétente ordonne, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision rendue dans l'autre Etat reçoive-la même publicité que si elle avait été rendue dans l'Etat même où elle est déclarée exécutoire. L'exécution peut encore être accordée partiellement pour l'un ou l'autre des chefs de la décision invoquée.

Article 27

La décision d'exécution produit effet contre toutes les parties au litige faisant l'objet de la décision à exécuter et sur toute l'étendue du territoire où ses dispositions sont applicables.

Elle permet également au jugement rendu exécutoire, de produire à partir de la date de cette décision, en ce qui concerne les mesures d'exécution, les mêmes effets que s'il avait été rendu par la juridiction qui a prononcé la décision d'exécution.

Article 28

La Partie qui invoque l'autorité de la chose jugée d'une décision judiciaire ou qui en réclame l'exécution doit produire :

1. Une copie de la décision réunissant toutes les conditions nécessaires a son authenticité;
2. L'original de l'acte de notification de la décision;
3. Un certificat du greffe du tribunal constatant que la décision n'a fait l'objet ni d'opposition, ni d'appel;
4. Une copie certifiée conforme de la citation adressée à la partie qui a été condamnée par défaut.

Article 29

Les sentences arbitrales rendues valablement dans l'un des deux Etats sont reconnues dans l'autre Etat et peuvent y être déclarées exécutoires lorsqu'elles remplissent celles des conditions qui sont prévues à l'article 23 qui leur sont applicables et si les conditions suivantes sont en outre réunies :

1. La loi de l'Etat requis pour l'exécution permet de résoudre un tel litige par voie d'arbitrage;
2. La sentence arbitrale est rendue en exécution d'une clause ou d'un contrat d'arbitrage valable et est devenue définitive;
3. Le contrat ou la clause d'arbitrage a donné compétence aux arbitres conformément à la loi en vertu de laquelle la sentence a été rendue.

Les sentences arbitrales doivent être exécutées dans la même forme que celle indiquée dans les articles précédents.

Article 30

Les actes authentiques exécutoires dans l'un des deux Etats sont déclarés exécutoires dans l'autre, par la juridiction compétente, d'après la loi de l'Etat où l'exécution doit être poursuivie.

Cette juridiction se borne- à vérifier si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans L'Etat, où ils ont été établis et si les dispositions dont l'exécution est poursuivie, n'ont rien de contraire à l'ordre public applicable de l'Etat où l'exécution est demandée, ou aux principes de droit applicables dans l'Etat.

Article 31

Les dispositions prévues par les articles du présent titre ne s'appliquent en aucun cas aux jugements rendus dans l'un des deux Etats contre le gouvernement de l'autre Etat ou contre l'un de ses fonctionnaires pour des actes commis seulement en raison de ses fonctions.

Elles ne peuvent également s'appliquer aux jugements dont l'exécution serait contraire aux traités et conventions en vigueur dans l'Etat où elle est demandée.

Article 32

Les règles par lesquelles la législation de l'un des deux Etats déclare ses juridictions compétentes en raison uniquement de la nationalité du demandeur et sans autre titre de compétence en ce qui concerne les contestations relatives à des obligations nées d'un contrat ou d'un délit ou d'un quasi délit ne seront pas applicables aux nationaux de l'autre Etat dans les cas suivants :

1. Lorsque le défendeur a son domicile ou sa résidence dans l'Etat dont il est national;

2. Lorsque l'obligation est née ou doit être exécutée dans l'Etat dont le défendeur est national.

La présente disposition sera appliquée d'office par les juridictions de chacun des deux Etats.

TITRE IV. INFORMATION JURIDIQUE

DISPOSITION GÉNÉRALE

Article 33

Les Parties contractantes s'engagent à se fournir mutuellement, conformément aux dispositions de cette Convention, des renseignements sur leurs législations, leurs jurisprudences respectives en matière civile, commerciale et administrative, ainsi que dans le cadre de la procédure civile et commerciale et de l'organisation judiciaire.

Elles s'engagent aussi à se communiquer des renseignements sur les décisions de jurisprudence concernant un point particulier ainsi que toute autre information juridique.

ECHANGE D'INFORMATION SUR LES LÉGISLATIONS RESPECTIVES

Article 34

L'autorité centrale du Royaume du Maroc et l'autorité centrale du Royaume d'Espagne se fourniront réciproquement par leur intermédiaire et sur demande, les informations relatives à leurs législations dans les domaines auxquels se réfère l'article 33.

Article 35

La demande d'information devra émaner soit d'une autorité judiciaire soit, dans le cadre de l'assistance judiciaire, de l'autorité chargée de statuer sur l'octroi de cette assistance.

Article 36

La demande d'information devra préciser l'autorité dont elle émane, ainsi que la nature de l'affaire. Elle devra indiquer de façon claire les sujets sur lesquels l'information relative à la législation de la Partie requise est demandée.

La demande devra inclure un exposé des faits, permettant une bonne compréhension et l'élaboration d'une réponse claire et précise. Des copies de documents pourront y être jointes, dans la mesure où ceux-ci seraient nécessaires pour préciser la portée de la demande.

La demande pourra avoir trait, à caractère complémentaire, à des sujets relatifs à des domaines différents de ceux visés à l'article 33, lorsqu'ils ont un rapport avec les sujets principaux de la demande.

La Partie requise pourra demander les renseignements complémentaires nécessaires pour élaborer sa réponse.

Article 37

1. L'autorité judiciaire dont émane la demande n'est pas engagée par l'information contenue dans la réponse.
2. La réponse à une demande d'information doit être donnée le plus rapidement possible.
3. Cette réponse ne donnera lieu à aucun remboursement de taxes ou frais, quelque soit la nature de ceux-ci.

TITRE V. DES EXTRAITS D'ACTES D'ETAT CIVIL ET DOCUMENTS OFFICIELS

Article 38

Sur demande des autorités judiciaires de l'une des Parties, l'autre Partie leur communique sans taxes et sans frais, les extraits des actes de l'état civil et autres documents y afférents, s'il y a lieu, concernant les nationaux de la Partie dont émane la demande.

Article 39

Les extraits des actes de l'état civil délivrés par une autorité compétente sur le territoire de l'une des Parties contractantes et revêtus du sceau officiel, n'ont pas besoin d'être légalisés pour être valables sur le territoire de l'autre Partie.

TITRE VI. DISPOSITIONS COMMUNES

DISPENSE DE LÉGALISATION

Article 40

Les documents qui émanent des autorités judiciaires ou d'autres autorités de l'un des deux Etats, ainsi que les documents dont ces autorités attestent la certitude et la date, la véracité de la signature ou la conformité à l'original, sont dispensés de légalisation ou de toute formalité équivalente, lorsqu'ils doivent être produits sur le territoire de l'autre Etat.

Les documents doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et s'il s'agit de copies, être certifiées conformes à l'original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité.

En cas de doute sérieux sur l'authenticité d'un document, une vérification sera effectuée par l'intermédiaire de l'autorité centrale des deux pays.

LANGUES ET TRADUCTIONS

Article 41

Les deux autorités centrales pourront rédiger leurs communications dans leurs langues respectives. Une traduction en langue française y sera jointe.

Article 42

Les documents qui doivent être notifiés, les commissions rogatoires, les décisions relatives à des condamnations aux dépens et aux frais de procédure, les demandes d'assistance judiciaire ainsi que les documents et les demandes d'information nécessaires qui y sont jointes ainsi que leurs annexes doivent être rédigés dans la langue de la Partie de l'autorité requise ou accompagnées d'une traduction en langue française.

Article 43

Les traductions seront légalisées par l'autorité compétente des deux Etats.

La traduction des communications prévues à l'article 42 de la présente Convention ne donnera lieu à aucun remboursement de frais.

TITRE VII. DISPOSITIONS FINALES

Article 44

Tout différend découlant de l'application ou de l'interprétation de la présente Convention sera réglé par la voie diplomatique.

Article 45

La présente Convention entrera en vigueur provisoirement à compter de la date de sa signature et définitivement le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification attestant l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises dans chacun des deux Pays.

Article 46

La présente Convention est conclue pour une durée illimitée.

Chacune des Parties peut la dénoncer au moyen d'une notification écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Partie. La dénonciation prendra effet un an après la date de son envoi.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé la présente Convention. Fait à Madrid, le 30 mai 1997, en double exemplaires originaux en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.

Pour Le Royaume d'Espagne :
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN
Ministre de Justice

Pour Le Royaume du Maroc :
ABDERRAHMANE AMALOU
Ministre de Justice

[TRANSLATION - TRADUCTION]

CONVENTION ON JUDICIAL ASSISTANCE IN CIVIL, COMMERCIAL
AND ADMINISTRATIVE MATTERS BETWEEN THE KINGDOM OF
SPAIN AND THE KINGDOM OF MOROCCO

The Kingdom of Spain and the Kingdom of Morocco,

Desiring to promote and reinforce the traditional relations of friendship and legal co-
operation between their countries;

Considering that the establishment of a system for the recognition and execution of ju-
dicial decisions will promote mutual confidence in their judicial institutions;

Have agreed to conclude a Convention on judicial assistance in civil, commercial and
administrative matters and to that end adopt the following:

CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS

ACCESS TO THE COURTS

Article 1

Nationals of each State shall have free and easy access to both judicial and administra-
tive tribunals in the territory of the other State for the purpose of defending their rights.

"CAUTIO JUDICATUM SOLVI"

Article 2

Nationals of one Party who are plaintiffs or parties before the judicial authorities of the
other Party in a civil, commercial or administrative matter shall be exempt from the require-
ment to provide a security or other deposit of any kind, even in cases where their domicile
or customary residence is not in the territory of one of the Parties.

LEGAL PERSONS

Article 3

The provisions of this Convention relating to nationals of one Party shall apply, subject
to the provisions concerning public order of the State in which the proceedings have been
instituted, to legal persons duly constituted under the legislation of one of the Parties and
having their principal place of business in the territory of the other Party.

Article 4

1. The Ministry of Justice of the Kingdom of Spain and the Ministry of Justice of the Kingdom of Morocco are designated the central authorities for the purposes of this Convention.
2. Each Party shall notify the other by note verbale of any change in its designated central authority.
3. Such change shall be deemed effective if the other Party raises no objection.

JUDICIAL ASSISTANCE

Article 5

Nationals of one Party before the courts of the other Party shall have the right to judicial assistance and exemption from prepayment of legal fees and costs on the same basis as the latter's own nationals and taking into account their personal, material and family situation.

Certification relating to the plaintiff's income, assets and personal and family situation shall be issued by the competent authority of the Party in whose territory he has his domicile or residence.

Said certification shall be issued by the competent territorial diplomatic or consular authority if the person in question resides in a third State.

The judicial authority responsible for taking a decision on the granting of judicial assistance may request additional information from the authority which issued the certification.

CHAPTER II. JUDICIAL ASSISTANCE IN CIVIL, COMMERCIAL
AND ADMINISTRATIVE MATTERS

JUDICIAL AND EXTRAJUDICIAL DOCUMENTS
LETTERS ROGATORY

Article 6

1. Judicial and extrajudicial documents in civil, commercial and administrative matters and letters rogatory emanating from one of the Parties shall be sent by the central authority of the requesting Party to the central authority of the requested Party either directly or through the diplomatic channel.
2. Notices and letters rogatory must specify:
 - (a) The judicial authority from which they emanate;
 - (b) The identity, capacity and profession of the parties and, if possible, their nationality and, in the case of legal persons, their official name and principal place of business;

(c) The domicile, residence or exact address of each Party as well as those of their representatives or counsel, where applicable;

(d) The nature and purpose of the notices and letters rogatory; and, with regard to letters rogatory, a description of the measures to be taken and, where applicable, the questions to be asked of witnesses;

(e) If the address of the person named in the request for judicial assistance is imprecise or incorrect, the requested authority shall, to the extent possible, attempt to ascertain the correct address.

Should the requested authority have no jurisdiction in the matter, it shall automatically transmit the document to the competent authority and shall so inform the requesting authority.

TRANSMISSION OF JUDICIAL AND EXTRAJUDICIAL DOCUMENTS

Article 7

A request for service of a judicial or extrajudicial document shall be accompanied by a copy of that document. Service shall be effected by the competent authority in accordance with the laws of the requested State.

Article 8

1. If ordinary delivery is not possible because the addressee refuses to accept the document voluntarily, service using one of the special procedures provided for in paragraph 2 of this article may also be requested as an alternative.

2. At the express request of the requesting Party, the requested authority shall effect service in accordance with the procedure provided for under its domestic legislation for service of similar documents, or in accordance with a special procedure compatible with that legislation.

3. The costs of such service shall be paid by the requesting Party.

Article 9

If the requesting State has not expressly requested, as provided for in article 8, paragraph 2, of this Convention, that the document be served in accordance with the procedures indicated in that article, or if service has not been possible by ordinary delivery in accordance with article 7 of this Convention, the requested State shall return the document to the requesting State without delay and shall inform it of the reason why the document was not served.

Article 10

Proof of service shall be given either by a dated receipt signed by the addressee or by an attestation by the requested authority, stating that the document has been served and specifying the manner and the date of service.

The receipt or attestation shall be written on or attached to one of the copies of the document to be served and shall be returned to the central authority of the requesting Party in accordance with the provisions of article 6 of this Convention.

Article 11

Without prejudice to the provisions of the preceding articles, each Party may serve documents on its own nationals who are located in the territory of the other Party directly through its diplomatic and consular agents and without coercion.

LETTERS ROGATORY

Article 12

1. The provisions of articles 8, 9, 10 and 11 of this Convention shall apply to the execution of letters rogatory in civil, commercial and administrative matters.

2. Letters rogatory shall be sent by the central authority of the requested Party to the competent authority. Should the requested authority have no jurisdiction in the matter, it shall automatically transmit the letter rogatory to the competent authority and shall so inform the requesting Party.

Article 13

Each Party may also have letters rogatory executed directly through its consular or diplomatic agents, without coercion, when the individuals requested to testify or present documents are nationals of the requesting Party only.

The nationality of the person who is the subject of the letter rogatory shall be determined in accordance with the law of the Party in whose territory the letter rogatory is to be executed.

Any order or notice for the purpose of the presentation of documents must expressly indicate that no coercion shall be used in the execution of the letter rogatory.

Article 14

The requested authority may refuse to execute a letter rogatory if, under its legislation, it has no jurisdiction in that matter or if it is of such a nature that it could prejudice its sovereignty, security or public order. In such cases, the requested Party must so inform the requesting authority, explaining its reasons.

Article 15

The requested authority must inform the requesting authority, on the latter's express request, of the date and place of execution of the letter, so that the interested Party may appear in person if he so desires or have himself represented in accordance with the legislation in force in the requested State.

Article 16

The execution of letters rogatory shall not give rise to reimbursement of costs of any kind, except in the case of fees paid to experts and the costs of expert reports, the amount and nature of which shall be communicated to the requesting Party. Nevertheless, the requested Party shall inform the receiving body of the requesting Party of the amount of any costs incurred.

Article 17

Judicial proceedings arising from the execution of a letter rogatory in accordance with the preceding provisions shall have the same legal effect as if executed before the competent authority of the requesting State.

Article 18

Letters rogatory must be accompanied by a certified true translation in the language of the requested authority.

EXEQUATUR: COSTS AND EXPENSES

Article 19

A request for enforcement of a decision relating to the costs of proceedings, in accordance with articles 18 and 19 of the Hague Convention of 1 March 1954, may also be sent directly to the competent judicial authority by the interested Party.

Article 20

The competence of the authorities submitting the documents described in article 19 of the Hague Convention mentioned above does not require authentication by a higher authority.

Article 21

In order to prove that decisions relating to the costs of the proceedings have the force of *res judicata*, they must be accompanied by:

1. A document indicating that the party against whom execution is being requested has been notified of the decision;

2. An attestation stating that the decision is no longer subject to an ordinary review or to an appeal to a higher body or that no such remedy or appeal is possible.

CHAPTER III. RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF JUDICIAL DECISIONS,
ARBITRAL AWARDS AND AUTHENTIC INSTRUMENTS

Article 22

1. Judicial decisions in civil, commercial and administrative matters, including those granting reparations for damages and prejudice under civil liability to victims of criminal offences, rendered by the competent bodies of either Contracting State, shall be considered to have the force of *res judicata* and to be enforceable in the other State, under the conditions and in the manner established in this chapter.

2. This Convention shall not apply to decisions made in the following matters and cases:

(a) Inheritance or succession rights;

(b) Bankruptcy, liquidation procedures involving insolvent companies and other insolvent legal persons, certificates of bankruptcy and similar agreements between debtors and creditors;

(c) Disputed decisions in the area of social security, as defined in the Convention on social security between Spain and Morocco of 8 November 1979;

(d) Precautionary and provisional measures, except maintenance obligations.

Article 23

Judicial decisions in civil, commercial and administrative matters rendered by the competent courts of Spain and Morocco respectively, shall have force of *res judicata* in the territory of the other State if they meet the following conditions:

1. The decision is rendered by a court that is competent under the rules applicable in the country in which the decision was rendered;

2. The parties were legally summoned, represented or declared to be in default;

3. The decision has acquired force of *res judicata* and has become enforceable under the laws of the State in which it was rendered;

4. The decision does not contain provisions contrary to public order in the State in which enforcement is requested or contrary to the principles of international law applicable in that State. Neither shall it be in conflict with a judicial decision rendered in that same State which has already acquired force of *res judicata*;

5. No action between the same parties and relating to the same subject-matter was pending before a court of the requested State prior to the institution of proceedings before the court which rendered the decision to be enforced.

Article 24

The decisions referred to in the preceding article shall not lead to any forcible or coercive method of enforcement on the part of the authorities of the other State, nor shall those authorities make any public announcement about such enforcement or impose any formalities such as registration, inscription or rectification in the public archives, until such decisions have been declared enforceable in the territory of the requested State.

Article 25

The competent authority (the court of first instance of each State) shall grant enforcement of the decision, at the request of the interested Party, in accordance with the laws of the State in which enforcement has been requested.

The procedure for requesting enforcement shall be governed by the law of the requested State.

Article 26

The competent tribunal shall confine itself to ascertaining whether the decision for which enforcement is requested meets all the criteria set out in article 23 for having force of res judicata. It shall do so automatically and shall state its conclusion in its decision.

Upon accepting the request for enforcement, the competent authority shall order, as required, any necessary measures so that the decision rendered in the other State receives the same publicity as if it had been issued in the State in which enforcement is to be carried out. Partial enforcement of one or more of the requests contained in the decision in question may also be granted.

Article 27

A decision for enforcement shall take effect with regard to all parties to the lawsuit to which the decision to be enforced relates and throughout the territory in which its provisions are applicable.

Such decision shall also permit the judgement rendered enforceable to have, as from the date of the decision, the same effects with regard to the manner of enforcement as if it had been rendered by the court which originally rendered the decision for enforcement.

Article 28

The Party invoking the res judicata force of a judicial decision or requesting enforcement of such a decision, shall submit:

1. A copy of the decision which meets all criteria necessary for proving its authenticity;
2. The original of the document effecting service of the decision;
3. A certificate from the clerk of the court stating that there has been no ordinary review or appeal of the decision;

4. A certified true copy of the notice served to a party declared to be in default.

Article 29

Arbitral awards rendered under the law of one of the States shall be recognized in the other State and may be declared enforceable in the latter when they meet the conditions set out in article 23, as applicable, as well as the following conditions:

1. The laws of the State of which enforcement is requested provide for settlement of similar litigation through the courts;
2. The arbitral award was made under the terms of a valid arbitration clause or contract and has been declared definitive;
3. The arbitration contract or clause recognizes the competence of the arbitrators in accordance with the legislation under which the award was made.

Arbitral awards shall be enforced in the manner laid down in the preceding articles.

Article 30

Authentic documents declared enforceable in one of the States shall be declared enforceable in the other by the competent court in accordance with the laws of the State in which enforcement is to take place.

That tribunal shall confine itself to determining whether the documents meet the conditions necessary to be recognized as authentic in the issuing State and that the provisions to be enforced do not pose a threat to public order or violate the principles of law applicable in the State in which enforcement is requested.

Article 31

The provisions contained in the articles of this chapter shall in no case apply to decisions rendered in one of the States against the Government of the other State or one of its public officials for acts committed solely in the performance of his duties.

Neither shall they apply to decisions the enforcement of which would be in violation of any treaties and conventions in force in the requested State.

Article 32

The provisions of the legislation of one of the States which declare its courts to be competent solely by virtue of the nationality of the applicant, without any other grounds, in matters relating to challenges to obligations arising out of a contract, delict or quasi-delict, shall not apply to nationals of the other State in the following cases:

1. If the plaintiff has his domicile or residence in the State of which he is a national;
2. If the obligation was created or must be enforced in the State of which the plaintiff is a national.

This provision shall be applied automatically by the courts of each State.

CHAPTER IV. LEGAL INFORMATION

GENERAL PROVISION

Article 33

As provided for in this Convention, the Contracting Parties undertake to provide each other with information on their respective laws and jurisprudence in civil, commercial and administrative matters, as well as on the framework of their civil and commercial procedure and their legal systems.

They also undertake to inform each other of judicial decisions concerning specific issues as well as any other juridical information.

EXCHANGE OF INFORMATION ON THEIR RESPECTIVE LAWS

Article 34

The central authority of the Kingdom of Spain and the central authority of the Kingdom of Morocco shall, upon request, provide each other with information relating to their laws in the areas referred to in article 33.

Article 35

A request for information must be made by a judicial authority or, in cases involving judicial assistance, by the authority responsible for taking a decision on the granting of such assistance.

Article 36

A request for information must indicate the originating authority as well as the nature of the case. It shall clearly indicate the issues in respect of which information on the laws of the requested Party is being requested.

The request must include a statement of the facts which clearly explains the case and allows for a clear and precise response. Copies of supporting documentation may be included with the request as needed for a precise understanding of the nature of the request.

The request may in addition refer to issues other than those referred to in article 33 if they are relevant to the central issues of the request.

The requested Party may request any additional information necessary for it to come to a decision.

Article 37

1. The requesting judicial authority shall not be bound by the information contained in the response.

2. The response to a request for information must be made as quickly as possible.
3. Such response shall not be subject to any reimbursement of fees or costs, of any kind.

CHAPTER V. EXTRACTS FROM CIVIL REGISTRY RECORDS
AND OFFICIAL DOCUMENTS

Article 38

Upon request from the judicial authorities of one Party, the other Party shall transmit to them free of fees or costs, extracts from civil registry records and other similar documents, as applicable, relating to nationals of the requesting Party.

Article 39

Extracts from civil registry records provided by a competent authority in the territory of one of the Contracting Parties and bearing its official seal, shall not require authentication in order to be valid in the territory of the other Party.

CHAPTER VI. COMMON PROVISIONS

EXEMPTION FROM AUTHENTICATION

Article 40

Documents issued by the judicial or other authorities of either State, as well as documents whose authenticity and date, true signature or conformity to the original have been certified by said authorities, shall be exempt from authentication or any other equivalent formality when submitted in the territory of the other State.

Such documents must be signed and bear the official seal of the authority responsible for transmitting them and, in the case of photocopies, must be certified as true copies of the original by that authority. In both cases they must be presented in such a way that their authenticity is clearly evident.

Should there be serious doubts concerning the authenticity of any document, the central authorities of both States shall be responsible for confirming its authenticity.

LANGUAGES AND TRANSLATIONS

Article 41

Both Central Authorities may draft their communications in their respective languages. A translation in the French language shall be attached thereto.

Article 42

Documents to be served, letters rogatory, decisions relating to awards of costs and expenses of proceedings, requests for judicial assistance, attached documents and requests for necessary information and annexes thereto must be drafted in the language of the Party of the requested authority or must be accompanied by a translation in the French language.

Article 43

Translations shall be authenticated by the competent authority of both States.

Translation of the communications referred to in article 42 of this Convention shall not give rise to the reimbursement of costs.

CHAPTER VII. FINAL PROVISIONS

Article 44

Any disagreement which may arise with regard to the implementation or interpretation of this Convention shall be resolved through the diplomatic channel.

Article 45

This Convention shall enter into force provisionally on the date of its signing and definitively on the first day of the second month following the date on which the last notification is received that the necessary constitutional formalities in each State have been completed.

Article 46

This Convention shall remain in force for an unlimited period. Either Party may denounce it by providing written notice to the other Party through the diplomatic channel. Such denunciation shall take effect one year following the date on which the notice was transmitted.

In witness whereof the plenipotentiaries of both Contracting States have signed this Convention. Done at Madrid on 30 May 1997 in two originals in the Spanish, Arabic and French languages, all three texts being equally authentic.

For the Kingdom of Spain:

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN
Minister of Justice

For the Kingdom of Morocco:

ABDERRAHMANE AMALOU
Minister of Justice